

EDITORIAL

Estamos a punto de entrar en los momentos definitivos de las elecciones para Presidente y Vice-Presidente de la República; elecciones que cierran todo un ciclo que se iniciara con el golpe de estado del 15 de Octubre de 1979 que pretendió realizar una serie de reformas y transformaciones en la sociedad salvadoreña, y cuyo fracaso se ha venido viendo a lo largo de estos años de derechización progresiva del proceso. Las elecciones, que se presentan por parte de la mayoría de partidos en contienda y por la Administración Reagan como un principio de solución política a la aguda crisis que vive El Salvador, significan en esencia, un paso más hacia la derechización; un cierre temporal a cualquier posible alternativa política de solución que pudiera poner fin a la guerra civil que se libra en el país, y la casi segura consolidación en el poder de las fuerzas conservadoras de derecha a ultranza que el golpe de 1979 intentó sacudirse pero que en el proceso mismo han ido recuperando sus posiciones perdidas.

¿Por qué afirmamos lo anterior? Básicamente, debido a las opciones partidarias que se presentan y al poder real que representan.

Si las elecciones de 1982, que eran una propuesta de EUA encaminada a dar apoyo a su proyecto político de guerra con reformas y legitimar en el poder al PDC fracasaron en sus objetivos primordiales, ahora tratan de convertirse en la fórmula que le permita a la Casa Blanca, encontrar los recambios políticos adecuados que le den continuidad a su proyecto contrainsurgente en El Salvador. Esto de por sí no puede augurar algún principio de solución no-militar al conflicto bélico.

Además, las alternativas posibles de triunfo tampoco parecen mostrar un camino de paz. ¿Qué pasaría si ganara el Ing. Duarte? En el caso hipotético que ganara, ya sea en la primera o en la segunda vuelta, probablemente no contaría con el apoyo to-

tal de la Fuerza Armada; tendría una Asamblea Legislativa que estaría en su contra; su gestión se vería constantemente boicoteada por los sectores del gran capital y de la ultra derecha que harían todo lo posible por desestabilizarla; y si bien la DC ha logrado ciertos entendimientos con los sectores obreros y campesinos, la única forma que tendría para mantenerse en el poder sería recurriendo a "pactos sociales" con la derecha, con lo cual se estaría renunciando a toda posibilidad de profundización y consolidación de las reformas y de los procesos de democratización.

¿Qué pasaría si quedara ARENA? En realidad, de acuerdo a lo que sus candidatos vienen prometiendo en la campaña electoral, se vislumbra una agudización del conflicto bélico, una recuperación total del poder económico por parte de los sectores más conservadores del gran capital y un mayor aislamiento del país en la palestra internacional.

Frente a estas dos fuerzas polarizadoras, el partido del Dr. Francisco José Guerrero pretende convertirse en una posible vía alternativa de solución. ¿Qué pasaría si queda el PCN? En el mejor de los casos, significa la vuelta al poder estatal de aquellos sectores políticos que en gran parte propiciaron el desencadenamiento del actual conflicto bélico que se libra en el país. La alternativa del PCN puede ser bien vista por la Administración Reagan en tanto sirva para mediatizar las contradicciones que el mismo proceso electoral que ellos han impulsado "a capa y espada" ha generado, pero en realidad, no representa ni la conciliación entre los proyectos "reformista" y "conservador" que actualmente disputan el poder, ni la posible reconciliación con aquellas fuerzas que han optado el camino de las armas y que en este momento se aglutinan en el FDR-FMLN.

Es más, basta leer las plataformas programáticas de cada uno de los partidos para ver que no se tratan en forma seria los grandes temas del país. En el fondo, muy pocos todavía creen que el proceso electoral generará el ambiente propicio para atenuar y poner fin al sufrimiento y a la agonía del pueblo salvadoreño. Todo lo contrario, además de no proyectar ningún horizonte de solución, lo único que parece desprenderse del mismo es una vuelta al pasado; eso sí, menos tolerante, más agresivo y más desgarrador para las inmensas mayorías populares.

¿Qué significa pues, esta consolidación de las fuerzas más conservadoras nuevamente en el aparato estatal? Esto es precisamente lo que trataremos de empezar a responder en este número del Boletín de Ciencias Económicas y Sociales. Se trata de pre-

sentar empírica y teóricamente, lo que ha significado para el pueblo salvadoreño, el denominado "poder oligarquico" en términos de la concentración del poder económico y del poder político e ideológico que de ahí se derivan. Ciertamente los acontecimientos coyunturales tienden muchas veces a hacernos olvidar cómo y por qué empezó toda esta situación que se vive en el país. Sin embargo, estamos convencidos de que es necesario trascender lo inmediato. Debemos comenzar a reflexionar e investigar científicamente las causas de la guerra y los ingredientes necesarios para solucionar los problemas que le dieron origen. La guerra sólo se acabará en forma definitiva cuando además de silenciar las armas, se reconozcan y ataquen las causas que la hicieron posible y tal vez inevitable.

Es importante también mostrar cómo las estructuras económicas, sociales y políticas de El Salvador fueron incapaces de satisfacer las aspiraciones de las mayorías populares en tanto que casi la totalidad de elementos de estas estructuras, instituciones, relaciones y mecanismos estaban pensados, organizados y funcionaban en beneficio de unas minorías que monopolizaban y disfrutaban del poder y de la riqueza. Estas minorías, que ciertamente no son catorce familias, pero que su número es reducido comparado con la totalidad del pueblo salvadoreño, son los mismos que ahora, bajo otros ropajes, quieren imponerle a la sociedad un modelo de desarrollo que ponga fin a las reformas, que reafirme sus privilegios y que excluya a la mayoría de la población de los beneficios que pudiera generar una posible estabilización económica.

Estos grupos, que han tenido el cuasimonopolio del conocimiento sobre la conducción y la administración de la economía, son los mismos que en nombre de la "racionalidad" exigen créditos para subsidiar "sus materias primas", "sus insumos", "su maquinaria", "su equipo" y otros gastos relacionados con el proceso productivo; son los mismos que claman por mejores precios para "su café", "su algodón", "su azúcar" y que presionan para que los mecanismos del mercado funcionen "libremente", pero para los cuales, la pauperización y la miseria del pueblo jamás han representado irracionalidad económica alguna. Este neoliberalismo a ultranza, que exige el sacrificio de todos por la voluntad y la libertad de otros (que son bien pocos) jamás llegará a confesar que está defendiendo una libertad que significa la miseria de la mayoría de la población; jamás dirá que quiere el derecho de mantener al pueblo en su miseria. Al contrario, insistirá en que quiere asegurar la dignidad humana, la libertad, la razón económica, ¡hasta se lamenta que haya hambre, miseria y desplazados

de guerra! Sin embargo, históricamente, defiende los valores y los criterios de comportamiento. cuyos productos son esta hambre y esta miseria.

Que la constitución política aprobada en Diciembre del año pasado prohíba a los empleados públicos el derecho a formar sindicatos y el de huelga; que se excluya a los trabajadores de la participación en las utilidades de la empresa; que se niegue el derecho a la antigüedad laboral; que la libertad de organización campesina se haya relegado a una ley especial y que se entierre legalmente a la Reforma Agraria es perfectamente racional. En este esquema lógico, cada quien debe resignarse a la "innata" desigualdad: al pobre se le ha asignado su pobreza, al rico su riqueza y por lo tanto ambos deben aceptar con humildad lo que se les ha asignado.

Así, la armonía que estos grupos nos proponen, no es más que el llamado a la preservación de la marginalidad, del desempleo, de los bajos salarios, de la falta de educación, de la falta de vivienda y de la salud, y además, de los rigores de un autoritarismo que ha lesionado los derechos fundamentales de la inmensa mayoría de los salvadoreños.

Urge pues, que reflexionemos sobre estos problemas. El germen del levantamiento social en este país ha sido la injusticia social; las estructuras económicas y políticas obsoletas que no han respondido a los retos del desarrollo y que ahora, después de 4 años de intentos fallidos de democratización, vuelve a cernirse bajo otras formas, sobre la inmensa mayoría, prometiendo más de lo de antes, aunque no necesariamente con la misma tolerancia.

Hay que comprender pues, que la verdadera libertad en una sociedad únicamente es posible asegurándoles a todos y cada uno de los grupos sociales, un marco de respeto y la posibilidad de su integración a todos los niveles posibles y pensables de la sociedad; cualquier exclusión, sobre todo en estos momentos, será fatal; y solamente seguirá profundizando la agonía de nuestro pueblo.

San Salvador, marzo de 1984.